RESOLUCIÓN: 216 (DOSCIENTOS DIECISÉIS)

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.

V I S T O para resolver el toca 236/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora ***** contra la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 491/2018, relativo al Juicio Sumario Civil de Alimentos, promovido contra ***** cuyo trámite correspondió al Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. La sentencia impugnada concluyó textualmente con los siguientes puntos resolutive:

“---PRIMERO: HA PROCEDIDO el presente Juicio Sumario Civil sobre ALIMENTOS DEFINITIVOS, promovido por *** EN CONTRA DEL C. ***** , toda vez que la parte actora demostró los hechos constitutivos de su acción, por lo tanto;**
---SEGUNDO: Se ratifica el porcentaje del 30% (TREINTA POR CIENTO) que se le venía entregando como pensión alimenticia provisional a la C. *** , que fuera ordenado mediante auto radicatorio de fecha nueve del mes de mayo del año dos mil dieciocho, con base en los razonamientos expuestos en el considerando Cuarto de éste fallo.**

---TERCERO.- Se condena al señor ***** , al pago de una pensión alimenticia ahora con el carácter de definitiva por el equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO) de la pensión jubilatoria que percibe como empleado jubilado de PETROLEOS MEXICANOS DEL DEPARTAMENTO DE MARINA DE ALTURA con número de ficha 189268, en favor su madre la C. ***** .

---CUARTO: Gírese atento oficio al REPRESENTANTE LEGAL DE PETROLEOS MEXICANOS DEL DEPARTAMENTO DE MARINA DE ALTURA para que se le informe que fue ratificado por este Juzgado el descuento del 30% (TREINTA POR CIENTO) ordenado mediante auto radicatorio de fecha nueve del mes de mayo del año dos mil dieciocho, que percibe por concepto de pensión jubilatoria el C. ***** , con motivo del embargo de pensión alimenticia, por lo que ahora deberá proceder a realizar dicho descuento en forma definitiva, a favor de la C. ***** , debiéndose poner la suma correspondiente por quincenas anticipadas a disposición de ***** .

---QUINTO.- No ha lugar a realizar condena de gastos y costas atendiendo a la naturaleza familiar del presente asunto.

---SEXTO.- Notifíquese a las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente...”

SEGUNDO. Una vez que se notificó la sentencia a las partes, la actora ***** interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el juez en efecto devolutivo mediante auto de 29 de marzo de 2019. Se

remitieron los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia del Estado con el oficio 1857 de 3 de mayo de 2019. Por acuerdo plenario de 21 de mayo en curso fue turnado el expediente a esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar para la substanciación del recurso. Se radicó el toca el día siguiente, habiéndose tenido a la apelante expresando en tiempo y forma los motivos de inconformidad que estima le causa la resolución impugnada.

Así, quedaron los autos en estado de fallarse; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es competente para resolver el presente recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

SEGUNDO. La actora ***** manifestó sus conceptos de agravio vía electrónica mediante escrito de 26 de marzo de 2019, que obra agregado al presente toca a fojas 8 a la 13, que hace consistir en lo que a continuación se transcribe:

“A G R A V I O S:

1.- La sentencia que combato me agravia en su Considerando Cuarto, al declarar que se ratifica el embargo del 30% sobre la pensión jubilatoria que percibe *** , toda vez que no observó lo estipulado en el Artículo 112 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, que a la letra dice:**

“LAS SENTENCIAS DEBEN CONTENER UN ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES CON VISTA DE LAS PRUEBAS APORTADAS O EL DERECHO ALEGADO SI EL PUNTO A DISCUSIÓN NO AMERITA PRUEBA MATERIAL.”,

asimismo, ésta sentencia también es violatoria del Artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, ya que este artículo dispone:

“Las Sentencias deberán ser congruentes con la Demanda, Contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito...”

y es el caso que en el presente Juicio la suscrita en mi demanda inicial demandé como prestación principal la ministración de una pensión alimenticia definitiva del 50% de los salarios y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe *** como trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos del Departamento de Marina de Altura ostentando la ficha número 189268 en favor de la suscrita ***** habiendo exhibido para el efecto copia certificada del acta de nacimiento de ***** , acta de sentencias en donde consta el nacimiento de la suscrita y con la cual se comprueba que la firmante tengo 90 años, así como diversos comprobantes de gastos y que si bien es cierto el juez primario les otorga valor probatorio al tenor de los artículos 325 y 397 del Código de Procedimientos en Vigor en el Estado, realiza una**

incorrecta valorización de las mismas al resolver el presente asunto.

Lo anterior, lo considero así, porque en su Considerando Cuarto el Juez A quo, resuelve que:

“...se ratifica el embargo del 30% (treinta por ciento) de la pensión jubilatoria ordenada mediante auto radicatorio emitido dentro del presente expediente; por lo que se condena al señor ** *****, al pago de una pensión alimenticia ahora con el carácter de definitiva por el equivalente al 30% (treinta por ciento) de la pensión jubilatoria que percibe como empleado jubilado de Petróleos Mexicanos del Departamento de Marina de Altura con número de ficha 189268 en favor de su madre la C. *****”***,

dejando de observar y tomar en consideración que el demandado ** ***** mediante escrito de fecha 15 de Febrero del 2019 presentado ante la Oficialía Común de Partes en esa misma fecha, se ALLANO a la demanda y a todas y cada una de las pretensiones de la misma, así como también admitió la totalidad de los hechos, manifestando inclusive que era su deseo renunciar al periodo probatorio concedido a las partes, escrito que fue debidamente ratificado ante la presencia judicial en fecha 21 de Febrero del 2019, por ende, si el demandado sometió su propio interés al del actor, a fin de dar solución a la controversia, tal situación implica una aceptación y reconocimiento de las pretensiones de la accionante, por lo que estimo que en la sentencia pronunciada no hace un análisis jurídico de la procedencia o improcedencia de mi acción con vista de los propios autos y del allanamiento a la demanda que hace el demandado, resultando incongruente la Sentencia con la demanda, porque en este caso al existir el Allanamiento a las prestaciones ya no opera el principio de proporcionalidad que la ley instituye y que es la que obliga a hacer un análisis sobre la posibilidad económica del deudor alimentista y las***

*necesidades del acreedor, que en este caso lo son ***** y ***** y ***** y además de estar justificado el título por el cual se dan los alimentos que lo es el de madre e hijo y probada su posibilidad económica, lo que obliga al juzgador a aprobarla en los términos planteados en la demanda inicial, ya que nadie mejor que el propio ***** es quien puede valorar su propia posibilidad económica y decidir el monto de pensión alimenticia que sobre sus salarios puede dar, y al no existir controversia alguna en el presente Juicio, como consecuencia de ello se insiste, debió de haberse otorgado el porcentaje equivalente al 50% por concepto de pensión alimenticia a cargo de los salarios y demás prestaciones que devenga ***** como trabajador de Petróleos Mexicanos en favor de la suscrita y por tal motivo, no puede operar el principio de proporcionalidad que instituye la Ley por haber mediado un previo allanamiento a la demanda y sus pretensiones, así como tampoco cabe hacer uso del arbitrio judicial porque, al no haber contienda, el juzgador no está facultado para determinar o calcular discrecionalmente lo que ya de antemano aceptó el demandado y si acaso disminuyera posteriormente la actual condición económica de ***** que le impidiese sobrevivir con decoro, tendría expedita la acción de reducción de pensión alimenticia que establece el Código Procesal Civil. Teniendo por analogía la aplicación de la Tesis que a continuación me permito transcribir:*

Época: Novena Época, Registro: 202719... PENSION ALIMENTICIA, ALLANAMIENTO RATIFICADO DEL DEMANDADO AL PAGO Y MONTO DE LA. INOPERANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE ARBITRIO JUDICIAL...

Argumentos los anteriores por los que considero se me causa el agravio del que aquí me duelo y solicito sea reparado en Segunda Instancia, dictando

ejecutoria en la que se revoque la resolución apelada y se dicte una nueva en la que se decrete como pensión alimenticia el equivalente al 50% a cargo de los salarios y demás prestaciones que devenga **
***** como trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos en favor de *****.***

II.- Pero independiente de lo anterior, me causa agravio la resolución dictada por el A quo al decir que por su parte el demandado no ofreció medios probatorios de su intención, cuando en realidad la misma Juzgadora en el Resultando Único último párrafo hace mención que mediante escrito presentado en fecha 15 de Febrero del 2019 compareció la parte demandada ** a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, en el cual se allanó a las prestaciones reclamadas dentro del presente Juicio, por tanto, resulta innecesario que el demandado no haya ofrecido medios probatorios, porque al existir un allanamiento a la demanda, implica una confesión expresa sobre las pretensiones reclamadas en el pleito, y ante tal circunstancia la Juzgadora estaba obligada a centrar el punto del debate sobre el allanamiento por parte del demandado a todas y cada una de las prestaciones reclamadas dentro del presente Juicio, por lo que al no haber sido considerado de esta manera, la sentencia emitida se torna incongruente, parcial y contraria a derecho, contraviniendo las disposiciones que rigen la materia de alimentos en los artículos 3, 7 y 288 del Código Civil en vigor, consideraciones, argumentos y estimaciones que en concepto de la apelante resultan desacertadas, ya que si bien es cierto que del contenido del Artículo 288 del Código Civil Vigente en el Estado, se advierte que contiene dos parámetros para fijar la pensión alimentaria, en primen orden, un parámetro general cualitativo que atiende al principio de proporcionalidad, y el segundo, un parámetro aritmético de mínimos y***

máximos. El primero es aplicable a todos los casos en concreto, en complementación con el segundo, sin embargo, habrá casos en que el parámetro aritmético de mínimos y máximos del porcentaje de la pensión no podrá ser empleado en estricto sentido, es decir, deberá atenderse a las circunstancias particulares de cada caso, así las cosas tenemos que el Juez A Quo, no obstante el haberle acreditado el título generador por el cual se solicitan los alimentos que es el vínculo filial madre-hijo, así como la capacidad económica del que otorga la pensión y de haberse ratificado la voluntad del demandado de allanarse a la demanda y sus pretensiones, no concede la aprobación del porcentaje reclamado por la compareciente en mi promoción inicial. Motivo por el cual se me causa el agravio que aquí expongo y solicito se repare en Segunda Instancia.

Teniendo por analogía la aplicación de la Tesis que a continuación me permito transcribir:

**Época: Novena Época, Registro: 192958...
ALLANAMIENTO A LOS HECHOS DE UNA DEMANDA. EL JUZGADOR DEBE CONSIDERARLO EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE REALIZADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)...**

**Época: Novena Época, Registro: 181384...
ALLANAMIENTO Y CONFESIÓN. AMBAS INSTITUCIONES TIENEN EN COMÚN EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA, SIN EMBARGO LA PRIMERA TAMBIÉN ACEPTA LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN Y LA APLICABILIDAD DEL DERECHO, SIMPLIFICANDO CON ELLO EL PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR UNA SOLUCIÓN CON MAYOR EXPEDITEZ (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)..."**

TERCERO. Los agravios transcritos, expresados por la actora en el juicio de alimentos de origen, resultan de

estudio innecesario, en atención a que esta Sala advierte, oficiosamente, una violación procesal que trasciende en el procedimiento, pues no se dio la intervención en calidad de tercero llamado a juicio a ***** cuyo favor aplica un embargo mercantil en diverso juicio respecto del salario que percibe el demandado, de tal manera que dicho embargo puede verse afectado al establecerse la pensión alimenticia del caso, pues el salario del demandado será la fuente del porcentaje alimenticio de la aquí apelante.

Para arribar a la anterior conclusión, es necesario transcribir los artículos 40, 51 fracción V y 241 del código procesal civil, con el objeto de evidenciar la figura jurídica del tercero llamado a juicio, y la obligación judicial de subsanar de oficio los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal:

“ARTÍCULO 40. *En el juicio tienen carácter de parte, los que ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre se ejercitan una acción, y aquél frente al cual es deducida. Lo tienen, igualmente, las personas que hacen uso del derecho de intervención en calidad de terceros, en los casos previstos en éste Código.”*

“ARTÍCULO 51. *Las partes pueden pedir que un tercero sea llamado al juicio para que le pare perjuicio la sentencia, en los siguientes casos:*

I... II... III... IV...

V.- En los demás casos en que se autorice la denuncia por disposición de la ley, o porque el litigio sea común a una de las partes, o cuando se pretenda una garantía del tercero llamado al juicio”.

“ARTÍCULO 241. El demandado podrá denunciar al juez y hacer valer como excepciones, los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. Sin embargo, ellos pueden hacerse valer o mandarse subsanar de oficio por el juez, sin necesidad de requerimiento de parte, cuando tenga conocimiento de los mismos.”

Como se advierte de las disposiciones legales transcritas, son partes en el juicio no solo el actor y el demandado (por si mismos o a través de mandatario o apoderado legal), sino también el tercero llamado a juicio; que entre otras hipótesis, la figura del tercero llamado a juicio se define como una condición jurídica de quien sin ser actor ni demandado se constituye como parte en un procedimiento ya incoado, con la pretensión de obtener una sentencia que puede ser coincidente o excluyente de la pretensión de alguna de las partes, de tal manera que su intervención es para que se integre a la litis y que la sentencia que se dicte al respecto le depare alguna consecuencia jurídica, con lo cual se respetará su garantía de audiencia previa pudiendo aportar lo que estime necesario con la situación del

demandado, aunque de modo indirecto dado que su vinculación es con éste y no con el actor, lo que otorga mayor seguridad jurídica a las partes; y, que la satisfacción de los presupuestos procesales, entre ellos, oír a todos los interesados en el litigio de que se trate, ya sea como litisconsortes o terceros llamados a juicio, constituye una obligación judicial, pues de no hacerse no puede pronunciarse una sentencia válida.

Apoya las consideraciones que antecede, en cuanto a la definición del tercero llamado a juicio y participación en el proceso, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro 2004025, que dice:

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y TERCERO LLAMADO A JUICIO. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULOS 53 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 1094 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

El litisconsorcio pasivo necesario previsto en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a las demás. Por lo que el litisconsorcio es un presupuesto procesal que debe ser analizado de oficio, porque no puede dictarse una sentencia válida sin que se llame a todos aquellos

sujetos que pudieran resultar afectados con el dictado de esa sentencia. En consecuencia, el elemento esencial del litisconsorcio pasivo necesario es la existencia de una situación o relación jurídica indivisible en la que, todos aquellos que pueden resultar afectados, deben ser llamados a juicio, a fin de que pueda decidirse válidamente la litis fijada, lo que no podría hacerse por separado, es decir, sin oír a todos los interesados, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, no es posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la otra, por lo que es necesario dar oportunidad de intervenir a todas las partes interesadas en el juicio para que puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a dictarse. Por tanto, el tercero llamado a juicio regulado en el precepto 1094, fracción VI y 1203, último apartado, del Código de Comercio, es aquella condición jurídica de quien sin ser actor ni demandado, se constituye como parte en un proceso ya incoado, con la pretensión de obtener una sentencia favorable a sus intereses, sea coincidente con la pretensión de uno de los litigantes o excluyente de ella. Consecuentemente, el tercero llamado a juicio es toda persona que no es parte original en el conflicto que ha originado el proceso, pero que interviene en el mismo para auxiliar a alguna de las partes o bien para ejercitar algún derecho. Una de las finalidades de llamar a juicio a terceras personas a fin de que se integren a la litis y la sentencia que se dicte al respecto les depare alguna consecuencia jurídica, es la de permitir que intervengan con casi todos los derechos de una parte, con lo cual se respetará su garantía de audiencia previa pudiendo aportar todo aquello que ayude a la parte que coincida con la situación del demandado, aunque de modo indirecto, porque su vinculación sea con el demandado y no directamente con la actora; dándose así mayor seguridad jurídica a las partes y respetándose la cosa juzgada.”

Expuesto lo anterior, se sintetizarán diversas constancias que se desprenden del juicio de origen, con el objeto de evidenciar la necesidad de llamar a juicio en calidad de tercero, a *****

Mediante escrito de 4 de mayo de 2018, recibido en la oficialía de partes de los juzgados civiles de Altamira, Tamaulipas, ***** ocurrió en demanda alimenticia respecto de su hijo ***** de quien reclamó un porcentaje alimenticio del 50 por ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe como trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos departamento de Marina de Altura, ficha 189268; habiendo expuesto como sustento de la demanda alimenticia, contar con noventa años de edad, viuda, dedicada a las labores del hogar, que vive en el mismo domicilio de su hijo demandado, pero que éste desde mayo de 2017 la dejó en el más completo abandono económico pues se ha negado a otorgarle dinero y ayuda para los gastos de la casa (pago de agua, luz, teléfono, gas, etc.) y sus necesidades de comida, anexando diversos recibos por concepto de energía eléctrica por la cantidad de \$92.00, de agua potable por la suma de \$93.55, y de teléfono por la cantidad de \$222.00, y asimismo agregó el acta de nacimiento con la que acreditó el vínculo de madre que la une con su hijo demandado (foja 1 a la 11).

de conformidad por auto de 13 siguiente, habiéndose girado el oficio correspondiente (páginas 21 a la 24).

Dicho informe fue rendido mediante oficio de 28 de junio de 2018, en el que únicamente se proporcionó el dato relativo a que se trata de un embargo del 30 por ciento decretado en el expediente 640/2016, pero sin precisar el tipo de juicio ni el juzgado que lo ordenó (foja 25).

Por escrito de 13 de julio de 2018, la actora dijo haber obtenido información extra judicial en el sentido de que el diverso embargo que grava los ingresos de su hijo demandado, deriva del juicio ejecutivo mercantil 640/2016 promovido por ***** en el juzgado quinto civil de Altamira, Tamaulipas, por lo que solicitó que se recabara información en el mencionado juzgado respecto de dicho embargo; petición que fue acordada de conformidad por auto de 31 de julio de 2018, habiéndose girado el oficio correspondiente (páginas 27 a la 30).

La juez quinto civil de la citada población, mediante oficio 1959 de 9 de agosto de 2018, informó que en el índice de asuntos del juzgado a su cargo, se encuentra radicado el expediente ejecutivo mercantil 640/2016 y que mediante sendos autos de 26 y 30 de junio de 2107

*se ordenó mediante exhorto girar oficio a la fuente laboral del demandado para que descontara el 30 por ciento del excedente del salario y demás prestaciones de la pensión jubilatoria que percibe el demandado ***** ***** , ficha 189268, a favor del acreedor ***** (foja 31).*

Por escrito de 17 de agosto de 2018 compareció la actora, habiendo solicitado se girara oficio a la fuente laboral de su hijo demandado, para que el embargo alimenticio decretado a su favor, se aplicara de manera preferente sobre el diverso embargo mercantil a favor de *****; lo cual fue acordado de conformidad por auto de 21 de agosto de 2018, habiéndose girado el oficio de estilo (páginas 34 a la 37). *El 14 de febrero de 2019, compareció personalmente al juzgado el demandado ***** ***** ***** , para notificarse del juicio alimenticio instaurado por su madre, quedando así formalmente emplazado (foja 43).*

Por escrito de 15 de febrero de 2019, el demandado produjo contestación a la demanda, habiéndose allanado a todas y cada una de las prestaciones reclamadas por su madre actora, y por otra parte renunció al periodo probatorio (páginas 45 y 46).

A dicha contestación de demanda le recayó auto de 19 de febrero de 2019 en el sentido de que para acordar lo conducente era necesaria la ratificación del escrito por parte del demandado; habiendo comparecido éste de manera personal el 21 de febrero de 2019 para ratificar el contenido y firma del escrito de contestación de demanda (foja 49).

Por auto de 4 de marzo de 2019, se tuvo a la ministerio público adscrita al juzgado por desahogando la vista que se le otorgó en el asunto, y además se ordenó dictar la sentencia correspondiente (página 54).

El 12 de marzo de 2019 se pronunció la resolución apelada, en la que se estableció una pensión alimenticia a favor de la actora ***** por el 30 por ciento del salario y demás prestaciones que percibe su hijo demandado ***** como pensión jubilatoria por parte de Petróleos Mexicanos departamento de Marina de Altura – ficha 189268- (fojas 55 a la 60).

Ahora bien, como se advierte de la relatoría de constancias que antecede, la Sala estima que la resolución apelada no debe concedérsele existencia jurídica y validez formal, dado que no se llamó a juicio en calidad de tercero para que le parara perjuicio la

sentencia, a *****; por lo que debe reponerse el procedimiento de primera instancia para tal efecto.

Así se considera, en virtud de que como lo informó el diverso juez quinto civil de Altamira, Tamaulipas, en contra de ***** existe un embargo mercantil decretado en el expediente 640/2016 desde el 26 y 30 de junio de 2017, en el que se le descuenta el 30 por ciento del excedente del salario y demás prestaciones de la pensión jubilatoria que percibe en Petróleos Mexicanos departamento de Marina de Altura, ficha 189268, en favor de *****

Por ende, si la actora del juicio de alimentos ***** demandó el 4 de mayo de 2018 una pensión alimenticia a su favor, la que deberá aplicarse de la pensión jubilatoria que percibe su hijo demandado ***** , misma pensión que, como se dijo, se encuentra gravada por un diverso embargo mercantil anterior establecido el 26 y 30 de junio de 2017, a favor de *****; entonces, evidente resulta que era necesario llamar a éste al procedimiento como tercero en el juicio de alimentos, en respeto a su garantía de audiencia, para que le deparara perjuicio o

consecuencias jurídicas la sentencia que al efecto se dicte, pues con motivo de la pensión alimenticia que se establezca en el caso, pudiera verse disminuido el quantum del embargo mercantil en el que figura como acreedor.

En consecuencia, debe reponerse el procedimiento de primera instancia a partir de la comparecencia personal del demandado al juzgado, en la cual ratificó el contenido y firma de la contestación de demanda (foja 49); quedando nulo lo actuado con posterioridad.

Para ello, deberá requerirse a la actora para que proporcione el domicilio del tercero llamado a juicio o bien, mediante informe que se solicite al juez quinto civil de Altamira para los mismos efectos (en el juicio 640/2016 debe constar un domicilio proporcionado por el actor), y hecho lo cual, se le emplace y alegue lo que a sus intereses corresponda, y así continuarse con la secuela procesal y en su oportunidad dictar la sentencia del caso.

Bajo las consideraciones que anteceden, ante lo innecesario del análisis de los agravios expresados por la actora apelante, y en atención a la destacada violación procesal, con apoyo en el artículo 926 del código de

procedimientos civiles, lo que procede es revocar la sentencia impugnada, y en su lugar ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia, para los efectos que han quedado precisados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Los motivos de inconformidad expresados por la actora ***** contra la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 491/2018, relativo al Juicio Sumario Civil de Alimentos, promovido contra ***** cuyo trámite correspondió al Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas; resultaron de estudio innecesario, pues la Sala, oficiosamente, advirtió una violación procesal que es preciso reparar, ya que no se integró debidamente la relación jurídico procesal actor-demandado-tercero llamado a juicio.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia apelada, y en su lugar se ordena la reposición del procedimiento de primera instancia para los efectos precisados en el considerando TERCERO de este fallo de segundo grado.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por unanimidad de votos de los Magistrados Egidio Torre Gómez, Jesús Miguel Gracia Riestra y Alejandro Alberto Salinas Martínez, siendo Presidente y Ponente el primero, quienes firman con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Lic. Egidio Torre Gómez
Magistrado Presidente y Ponente

Lic. Jesús Miguel Gracia Riestra
Magistrado

Lic. Alejandro Alberto Salinas Martínez
Magistrado

Lic. Sandra Araceli Elías Domínguez
Secretaria de Acuerdos

Enseguida se publica en lista de acuerdos. CONSTE.
L'ETG/L'JMGR/ L'AASM/L'SAED/JSPDL

El Licenciado(a) SILVIA SALAZAR RODRIGUEZ, Secretario Proyectista, adscrito a la SEGUNDA SALA COLEGIADA CIVIL, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución (216) dictada el (JUEVES, 30 DE MAYO DE 2019) por el MAGISTRADO, constante de (22) fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: (el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y sus demás datos generales, y seguir el listado de datos suprimidos) información que se considera legalmente como (confidencial, sensible o reservada) por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 12 de julio de 2019.